Sobre el caso de Eulalio Gomes Batista:

Se expresa que los sujetos procesales intervinientes en los casos penales tienen delineadas sus atribuciones y mecanismos de intervención en el Código de Procedimientos Penales (víctima, imputado, Policía Nacional, Ministerio Público, abogados), por lo cual al constituirse en leyes no son afectables al régimen de acceso a la información pública. Así también, la facultad del Ministerio Público para exponer datos o informaciones que hacen a una investigación penal abierta se encuentra limitada a las partes del proceso bajo pena de vulnerar la Constitución Nacional, la ley penal y del debido proceso. Por último, cabe resaltar que **ésta dependencia carece de atribución para solicitar datos sensibles respecto a causas penales abiertas**. Todo lo expuesto se encuentra reglado en el Código Procesal Penal en el artículo 322 que reza: *“Carácter de las actuaciones. La etapa preparatoria no será pública para los terceros. Las actuaciones sólo podrán ser examinadas por las partes, directamente o a través de sus representantes. El Ministerio Público podrá disponer las medidas razonables y necesarias para proteger y aislar indicios de prueba en los lugares donde se investigue un hecho punible, a fin de evitar la desaparición o destrucción de rastros, evidencias y otros elementos materiales. Los abogados que invoquen un interés legítimo serán informados por el Ministerio Público sobre el estado de la investigación y sobre los imputados o detenidos que existan, con el fin de que puedan discernir la aceptación del caso. Las partes y los funcionarios que participen de la investigación y las demás personas que por cualquier motivo tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas, tendrán la obligación de guardar secreto. El incumplimiento de esta obligación será considerado falta grave y podrá ser sancionada conforme a las disposiciones previstas en este código o en los reglamentos disciplinarios”*.